PENSAR LA REVOLUCIÓN ÁRABE DE 2011-2012

TOMÁS PÉREZ DELGADO

Nada tan sorprendente como un proceso revolucionario, con todo el complicado juego de cambios a que da lugar. Y es que, cuando la gente se lanzó a la calle en Leningrado, en febrero de 1917, nadie podía prever la conquista del Palacio de Invierno en octubre, por más que algunos la desearan. Ni, por supuesto, quienes se enteraron y entendieron la juramentación del Juego de Pelota fueron capaces de advertir que aquella decisión acabaría ocasionando una gigantesca transferencia social de la propiedad de la tierra en Francia o la creación de un gran imperio en Europa. De idéntica forma, ningún observador pudo atisbar en las llamas que consumieron la vida del joven tunecino Bouazizi —ni siquiera Ben Alí, que lo visitó en el hospital— el resplandor de una hoguera que incendiaría en poco tiempo todo el mundo árabe.

Revolución. Revoluciones

Pero hablamos de *revolución*, y establecemos inmediata y subliminalmente una comparación con ciertos macrosucesos del pasado europeo, al no resultar tan fácil discernir lo acontecido desde finales de 2010 hasta hoy en el espacio al sur y al este del Mare Nostrum.

Para unos, igual que sucedió a partir de 1989 con la caída del comunismo en el Este europeo, estaríamos ante una nueva *primavera de los pueblos*, queriendo ver en las movilizaciones populares árabes, con su polifónico discurso situado inicialmente por encima de las divisiones de clase, y con su genérica reivindicación de democracia, un impulso parecido al que animó Europa en 1848. Justamente esta visión es la que más se compadece con uno de los términos más empleados en los medios árabes, en los que los acontecimientos de 2010, 11 y 12 se han definido como *re-nacimiento*, como *Ennahda* —denominación también de algunos partidos—, indicando con ello el carácter positivo de los cambios habidos y orillando el de *sublevación* o *revuelta* —la *fitna*, tan denigrada en las fuentes de la cultura política árabe—[1]. Hay también, sin embargo, sobre todo fuera de la región, quienes no han rehuido el concepto de *revuelta*, conscientes de las dificultades planteadas a la hora de asentar nuevos sistemas democráticos; desde este punto de vista, las caídas de Ben Alí o Mubarak no habrían supuesto por sí mismas la desaparición de los entramados de poder que sostuvieron el poder de aquellos y que estarían en disposición de pactar algún tipo de compromiso con las nuevas fuerzas emergentes, que muy pronto llevaría a situaciones de fondo parecidas a las derrocadas.

Con todo, lo indiscutible es que en Túnez, Egipto y Libia se ha producido una ruptura política: ha cambiado la titularidad del poder y se ha abierto un proceso destinado a dotar al Estado de una nueva constitución política, de sesgo, hoy por hoy, aparentemente democrático. Ahora bien, no es menos cierto que en Marruecos y Jordania —no ribereña del Mediterráneo pero ubicada en su *hinterland* más próximo— las movilizaciones populares de 2011, iniciadas bajo el aliento de las de Túnez, no han culminado en un cambio de ese tipo, sino en sendas reformas constitucionales que, en el caso de Marruecos, han llevado a elecciones que han abierto el poder a corrientes islamistas de oposición. Lo mismo, por otra parte, que en Túnez y Egipto, donde eso ha sido el resultado final del proceso revolucionario en curso.

Pero no solo fue sorprendente el estallido de las *revueltas*, *levantamientos* o *primaveras* árabes, sino también su simultaneidad. Aunque no podía ser de otra manera, al eclosionar como una gigantesca acción solidaria con el sacrificio con el que Bouazizi pretendió recuperar su *dignidad*. Esta es la motivación que aparece como el primer desencadenante de la revolución en todas partes, con un inicial carácter juvenil muy pronto diluido con la presencia en las calles de otras franjas de edad y de estratos sociales de lo más diverso, activados y coordinados para la protesta por los emblemas

de la sociedad de la comunicación que son las redes sociales *Twiter* y *Facebook*. Para algunos, esto es lo que permite hablar de ciberrevolución, aunque es evidente que tales medios son utilizados en los países árabes casi exclusivamente por la población urbana y, dentro de ella, solo por muy concretos segmentos.

En su pretensión inicial, las revoluciones árabes también han supuesto la búsqueda de la *liberación* —*Tahrir*, vocablo emblemático de la conquista de la libertad nacional en el siglo XX y también de la plaza cairota homónima—, identificada con la caída de los regímenes establecidos, percibidos como tiránicos por la población a causa de su habitual falseamiento de los resultados electorales, de su corrupción generalizada, de su limitación drástica de las libertades civiles y del uso sistemático de la coerción policial contra todo tipo de manifestaciones sociales autónomas o arbitrariamente consideradas intolerables por la autocracia.

Todas estas revoluciones se han desarrollado a través de manifestaciones de la población, a cuya amplitud creciente y a cuya persistencia en la ocupación del espacio público hay que atribuir la quiebra de los sistemas encarnados por Ben Alí y Mubarak y, en el caso de Marruecos y Jordania, los cambios constitucionales y de gobierno operados para atajar justamente las movilizaciones revolucionarias. Por lo que se refiere a Libia y Siria, fueron justamente las protestas y la ocupación de la *calle* las que dieron lugar a una contrarrevolución preventiva que no dudó en emplear fuerzas militares en una sangrienta represión, cuya extensión e intensidad acabó por transformar el movimiento de contestación política en alzamiento armado y en guerra civil.

En Libia, una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, inspirada por la Liga Árabe y los países occidentales, que buscaba hacer posible de manera efectiva el *derecho a proteger*, impidiendo los ataques del ejército sobre la población civil, se tradujo en la intervención aérea de varios países de la OTAN en apoyo de los rebeldes —con la exclusión significativa de Alemania—. Gracias a ello, y posiblemente también al apoyo de medios logísticos y de inteligencia, las fuerzas armadas y el propio régimen de Gadafi se desintegraron, no sin que las milicias y plataformas políticas rebeldes ejercieran también en algún caso formas de violencia similares a las padecidas, y no sin que el conflicto armado dejase también entrever las fracturas étnico-tribales que recorren el país. Desde el ángulo internacional, muy pronto China, Rusia y algunos países emergentes expresaron su disconformidad con la presunta extralimitación de la Organización Atlántica en la aplicación de la resolución de la ONU, condicionando con ello la posibilidad de ejercer nuevas acciones de protección de poblaciones civiles atacadas por sus propias fuerzas armadas, como en Siria.

En este país, después de más de año y medio de masacres de la población movilizada contra la dictadura, las fuerzas armadas, de seguridad y la milicia *shahiba* eran responsables de que en julio de 2012 el número de víctimas se elevase a casi 20.000 personas y a 100.000 el número de exiliados a los países vecinos, lo que dio lugar a peligrosos incidentes militares en Turquía y a una tensión larvada entre la oposición armada siria y el Hezbolá libanés. Pero en el caso de Siria, justamente el ejemplo de Túnez, Egipto y Libia se convirtió en un decisivo estímulo para la resistencia del régimen, fortificando de paso la voluntad de China y, sobre todo de Rusia, de sostenerlo a todo trance, condenando prácticamente al fracaso la tarea de mediación a cargo de la ONU encabezada por Kofi Annan.

Sería ingenuo pensar que la revolución árabe a que nos venimos refiriendo, transformada incluso en guerra civil en Libia y Siria, podría explicarse sin atender a la existencia de un amplio elenco de problemas sociales: demográficos (una pirámide poblacional muy ancha por su base); económicos (un paro crónico y particularmente alto entre los jóvenes, lo que determina que la población con mayor nivel formativo carece de perspectivas); y, finalmente, políticos (dictaduras represivas, corrupción generalizada, etc.). Y como siempre en los procesos revolucionarios, por encima de todo, una insatisfacción general producto de la quiebra de expectativas de amplios segmentos sociales.

En cualquier caso, son revoluciones que han roto con la orientación de las habidas después de la independencia, en las que un sector del ejército encabezaba un movimiento de élites sociales interesadas en un cambio que decía dirigirse a la reforma social y al progreso de las masas, pero que muy pronto se anquilosaba e integraba en él gran parte de la pesada herencia recibida de los grupos de poder anteriores a la revolución. Tal sería el caso del nasserismo y del reinado del Neo-Destur, prolongados en Egipto y Túnez hasta 2011, y también el del dominio de Gadafi y del bassismo de los Asad, en Siria. La novedad de las revoluciones de 2011-2012 estriba en su carácter más marcadamente popular y tendencialmente más democrático. Y su originalidad destaca no solo frente a las anteriores —enraizadas en las luchas de la descolonización y de la definición de una vía original de desarrollo, así como en las tensiones propias de la etapa de la Guerra Fría—, sino también frente a la propuesta del yihadismo islamista, cuya pretensión neocalifal ha quedado sumida en la irrelevancia.

Lo cierto es que uno de los rasgos más característicos de la revolución árabe ha sido que, a despecho de las proclamas de los poderes derribados y del temor de ciertos medios internacionales, el yihadismo no ha tenido ningún papel ni en el origen de las protestas ni en la forma en que estas se han desarrollado ni en el resultado electoral de las mismas. En general, las fuerzas islamistas implicadas en las movilizaciones populares —con cierto retraso, esa es la verdad— han asumido la voluntad popular de emplear métodos pacíficos en la consecución de sus demandas, que también abarcaron asuntos de sesgo tan secular como vivienda, paro, emigración, etc. Y, desde luego, decisiones occidentales como la de

apoyar militarmente a los rebeldes antigadafistas han vaciado de sentido las proclamas de los grupos yihadistas.

Desde este punto de vista, no deja de ser trágico que la principal contribución del intervencionismo aventurero de Bush y de sus asociados en Irak, que con el tiempo pretendió legitimarse esgrimiendo el objetivo de la democratización de Oriente Medio, fuera más bien la de estimular el yihadismo en esa zona y fuera de ella, hasta Pakistán y ciertas regiones del África negra. Para el mundo árabo-mediterráneo, realmente, aquella política fue más un lastre que una oportunidad democrática, pues creó las condiciones que impusieron en 2011-12 una clara limitación a la posibilidad de actuación occidental a favor de los árabes en rebeldía.

Ahora bien, aunque liberadora y tendencialmente democrática, no se puede decir que la revolución árabe haya tenido como objetivo confeso y prioritario la democratización *stricto sensu*. No en vano, el carácter crudamente policial de las dictaduras del Mediterráneo árabe propició una marcada debilidad de los instrumentos y mecanismos de la sociedad civil, al tiempo que contribuyó a alentar muchos elementos de la cultura política tradicional, singularmente la promoción de comportamientos políticos basados en la lealtad a los detentadores del poder, practicada a través de entidades intermedias como la tribu o la comunidad étnico-religiosa. Debido a ello, no han sido los partidos, los sindicatos y la prensa independiente, esenciales en todo orden democrático, los agentes fundamentales del cambio ni lo serán seguramente tampoco en las futuras democracias. En cualquier caso, la retórica de los voceros y teóricos de los regímenes autoritarios ya caídos, así como su apariencia institucional seudodemocrática, hicieron que la cultura democrática, sus fuentes y sus expresiones carecieran de suficiente arraigo entre la ciudadanía árabe movilizada contra las tiranías o fueran consideradas, como es el caso entre algunos islamistas, como un recurso occidental para mantener elementos esenciales de los poderes derrocados. Por otra parte, y tal como sucede siempre en las revoluciones, los objetivos de esta han sido cambiantes, ajustados al curso de los acontecimientos. De entre ellos, el dominante —lo sigue siendo en Siria— fue el de la expulsión de los *rais* liberticidas, a diferencia de Marruecos y Jordania, donde alauitas y hachemitas no han tenido que enfrentar sino presiones populares, fácilmente canalizables, dirigidas a acabar con la corrupción y a ampliar los estrechos márgenes de libertad; y a diferencia también de Palestina y Líbano, donde la posibilidad del cambio se ha congelado por mor de los precarios equilibrios internos y por mor de la existencia también —en Líbano— de un régimen de democracia representativa.

La debilidad de la cultura democrática ha sido el correlato lógico de la larga duración de regímenes de fuerza, dedicados a segar sistemáticamente el terreno a la posibilidad de elaboración de propuestas para un hipotético futuro en libertad. La tarea de oposición estaba además lo suficientemente fracturada y debilitada por las dictaduras como para hacerla casi inviable. De ahí que las masas que ocuparon la *calle* e impusieron el cambio de sistema no tuvieran líderes indiscutibles ni ideologías dominantes ni programas muy precisos. Y de ahí también que tras la expulsión de los dictadores se pusieran en marcha procesos de transición hacia nuevos sistemas, en los que las fuerzas trabadas en los largos años de dominio autoritario hayan logrado reestructurarse, adaptarse a la nueva situación y conservar parte de sus anclajes de poder. Frente al modelo español en los setenta, en que la ruptura final del régimen franquista se produjo como resultado de una reforma gradual, aunque profunda, del mismo, las revoluciones árabes han implicado una ruptura de los sistemas establecidos, para abrir tras ella un proceso de transición a un nuevo sistema tendencialmente más democrático. Es posible, en tal supuesto, que su evolución sea en definitiva coincidente, en el medio plazo, con la emprendida en Marruecos y Jordania.

Las Fuerzas Armadas

Pero ni las dictaduras árabes ni los avatares del ciclo revolucionario serían comprensibles sin una referencia a los ejércitos, que han jugado estos dos últimos años un papel fundamental, similar, pese a todas sus diferencias, al desempeñado en los grandes virajes emprendidos tras las independencias: golpe de palacio de Nasser contra el general Naguib, en Egipto, en 1954; golpe de Hafed El Asad en

Siria, en 1970; asunción efectiva de los poderes del Estado en Argelia, tanto en la sustitución de Ben Bella por el coronel Boumedienne, a mitad de los años sesenta, como en la dirección de la guerra contra el islamismo político a partir de 1992, después de la victoria electoral del Frente Islámico de Salvación el año anterior. Y es que, durante toda la etapa iniciada con la independencia, los ejércitos de Túnez, Egipto, Argelia y Siria, y a su sombra y en su dependencia las fuerzas de seguridad, se han manifestado actores políticos decisivos, en razón de su control sobre las grandes instituciones, sobre su política exterior y de seguridad, y sobre amplias franjas de la vida económica.

En la coyuntura revolucionaria abierta en 2010, fue justamente la pasividad del Ejército ante las movilizaciones populares, asumiendo el papel de institución auténticamente nacional, integrada por tropas de conscripción, la que impidió un baño de sangre y la que propició el abandono de Ben Alí, sin apenas resistencia, y de Mubarak, tras un desmadejado forcejeo con la *calle*. En el caso de ejércitos más profesionalizados o muy permeables a la representación en sus filas de una u otra comunidad, como en Siria y Libia, la vinculación de las Fuerzas Armadas (FAS) y de Seguridad al poder establecido y a los privilegios dimanantes de ello ha dado lugar a una resistencia a los cambios transformada pronto en guerra civil. Es decir, que cuando la pertenencia al cuerpo de oficiales o incluso la mera pertenencia a las Fuerzas Armadas o policiales está en relación directa con un origen étnico, territorial o de comunidad religiosa, la lealtad de las FAS y de Seguridad al Estado en cuanto tal, por encima de una u otra forma de régimen político concreto, es débil y puede dar lugar a resistencias numantinas a los intentos de cambio, favoreciendo la transformación de conflictos sociopolíticos en guerras civiles. Así ha ocurrido en Libia y Siria, incluso con la participación de mercenarios extranjeros, entre los gadafistas, o de grupos armados como el Hezbolá libanés, guardando las espaldas a los defensores de El Asad.

En Túnez y Egipto, el rechazo de las FAS a convertirse en última instancia de salvamento de los regímenes de Ben Alí y Mubarak permitió su caída y la apertura de un proceso que genéricamente podemos denominar democrático —pluripartidismo, elecciones libres parlamentarias y presidenciales, etc.—. Ahora bien, y por lo que se refiere a Egipto, conviene tener presente que el Ejército ha mantenido el control del país durante todo el proceso post-Mubarak, apoyándose no solo en su neutralidad entre el *rais* y una *calle* en rebeldía, sino también en el prestigio alcanzado en los largos años en que ejerció bajo Nasser un incuestionable liderazgo árabe, en la victoria lograda por Sadat sobre Israel, en 1973, e incluso bajo Hosni Mubarak (1981-2011), capitalizando en su beneficio y legitimidad su condición de pieza esencial en el equilibrio regional.

De otra parte, aunque tanto en Túnez como en Egipto el Ejército dominó el orden público a través de los servicios de inteligencia, tunecinos y egipcios no culpaban a las FAS de la violencia ejercida por los aparatos de seguridad en la anulación de las libertades civiles y políticas de opositores y disidentes. En amplios segmentos sociales las FAS conservaron la imagen de una instancia nacional-patriótica respetable, frente a las fuerzas de seguridad, a las que se hacía responsables de la violencia practicada. Esto explica que, por ejemplo en Egipto, el candidato presidencial Ahmed Shafik, jefe de Estado Mayor y exprimer ministro bajo Mubarak, no viera reprochársele nada de lo actuado por la *mujabarat* y lograse situarse en segunda posición en las elecciones.

Todo ello explica que, tras la caída de Mubarak, el 11 de febrero de 2011, asumiera el poder el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, presidido por el mariscal Tantaui, que abrió el proceso de transición a un nuevo sistema a través de un dificultoso proceso de elecciones parlamentarias y presidenciales. El resultado de estas ha sido la victoria del islamismo político de la Hermandad Musulmana, pese a su tardía incorporación a la movilización centralizada y simbolizada por la plaza Tharir y a su ambigua ubicación política durante la revolución, pues en más de una ocasión pareció mantener acuerdos tácitos con los militares.

Sin embargo, al poco de tomar posesión de su cargo, el nuevo presidente egipcio, Morsi, se vio obligado a mantener un *tour de force* con el Ejército, dispuesto a respaldar la decisión del Tribunal Constitucional que, poco antes de la elección presidencial, decidió suspender la actividad del Parlamento elegido unos meses atrás, argumentando acerca del incumplimiento de la ley electoral empleada para constituir una Cámara en la que Hermanos Musulmanes y Salafistas obtuvieron clara mayoría. En virtud de lo cual, y con arreglo al Estatuto Constitucional Provisional, el Consejo Supremo de las FAS asumía la función legislativa, consolidando una posición de poder muy notable sobre la administración del citado Estatuto, sobre la determinación del presupuesto y sobre la designación de una nueva Asamblea Constituyente, carácter que se le niega a la ya elegida. En estas condiciones, el nuevo presidente, Morsi, proclamado tras la renuncia del Ejército a imponer al mubarakista Shafik[2], se encontraba casi como un rehén político del poder militar. Consciente de su debilidad, y apenas investido, decidió anular la decisión del Tribunal Constitucional y restablecer en la plenitud de sus funciones al Parlamento; este llegó a reunirse, pero finalmente declinó ante la presión de las FAS y de sus peones, los jueces constitucionales procedentes de la etapa Mubarak.

Ante esas amenazas, los islamistas, que al comienzo de la revolución habían sido muy renuentes a recurrir a la movilización popular, llegando a establecer incluso una sutil componenda con los militares, acudieron a las movilizaciones en la mítica plaza Tahrir. Y encontraron además el apoyo decidido del presidente norteamericano, para quien el respeto a los principios democráticos debía considerarse

inseparable de la libre actuación de Morsi y del restablecimiento del Parlamento.

Así pues, dos legitimidades están en pugna: la salida de las urnas y la salida del derrocamiento de Mubarak, en manos de las personalidades e instituciones del régimen anterior. No habrá, sin embargo, choque de trenes, pues si a los militares no les faltan deseos de seguir disfrutando de la dirección de grandes parcelas de la vida económica y lo esencial del poder político del país, también es cierto que les falta decisión para proceder a una reconquista de la *calle*, perdida ya en tiempo de Mubarak.

Con todo, habrá que esperar a ver la suerte final de este pulso entre presidente y FAS para conocer el papel que estas ocuparán en el nuevo Egipto. Pero, de entrada, el propio pulso supone que no va a ser posible organizar una especie de *partido del orden*, tal como algunos auspiciaban, en el que Ejército e islamistas de la Hermandad acabarían por crear una mixtura de sistema político democrático/islámico de nuevo tipo, inspirado en el Partido turco de la Justicia y el Desarrollo (AKP). Y eso por la sencilla razón de que semejante planteamiento olvida que ha sido precisamente el AKP el que, con Erdogan al frente, ha logrado erradicar de las FAS cualquier veleidad de autonomía dentro del Estado y someterlas al poder del gobierno, condición *sine qua non* de todo orden democrático. Sin embargo, un entorno tan proclive a la conflictividad como el de Oriente Próximo no permite descartar sin más que en una coyuntura determinada por graves tensiones internas o externas pueda aparecer esa alianza islamo-militar.

Un caso aparte lo constituyen las Fuerzas Armadas argelinas, herederas del Ejército de Liberación Nacional, expresión militar del Frente de Liberación Nacional en guerra de independencia contra Francia. Esa alianza gobernó Argelia incluso tras la desaparición de Boumedienne. Y aun cuando desde los años ochenta y noventa del pasado siglo el FLN se ha visto obligado a compartir el poder con otras fuerzas políticas, el Ejército ha seguido estrechamente compenetrado con los diferentes gobiernos, incluso con los del presidente Buteflika, que ha sostenido ocasionalmente tensiones muy fuertes contra las pretensiones de autonomía política del alto mando y del Departamento de Información y Seguridad (DRS), piezas clave en la victoria sobre el islamismo en la guerra de 1992-2002. Pese a ello, el Ejército sigue siendo un actor muy destacado en la vida del país, debido a su capacidad de salvaguardar la seguridad de las fronteras exteriores, el orden interior, la cohesión territorial de un país inmenso y de difícil articulación —con minorías tan reacias a la asimilación como la beréber—. De ahí que conserven también una influencia muy poderosa sobre sectores esenciales de la vida económica.

Pero, como acabamos de apuntar, lo que explica más que otra cosa la consolidación de las posiciones de poder del Ejército es la memoria de la reciente guerra contra el islamismo radical. Las decenas de miles de víctimas y los centenares de miles de desplazados siguen pesando sobre el espíritu público con una fuerza tan determinante como para que una gran parte de la población, y desde luego el Gobierno, haya visto la reproducción en Argelia de movilizaciones como las de Túnez y Egipto como el antecedente de conflictos como los del inmediato pasado o como los producidos en Libia y Siria. Por eso no tuvieron excesivo eco en las manifestaciones convocadas a lo largo de 2011, desarticuladas por el Gobierno de Buteflika con una mezcla deletérea de concesiones económico-sociales y reforzamiento de las medidas de seguridad. Lo que no significa, obviamente, que en Argelia se haya clausurado esta historia.

Siria

La violencia, en la forma extrema de la utilización masiva del Ejército contra la población civil, comenzó en Siria en la primavera de 2011, justo en coincidencia con el levantamiento del pueblo libio, transformado pronto en una guerra civil victoriosa, como consecuencia del apoyo diplomático y militar de los países de la OTAN. En cierta medida, la evolución de las cosas en Libia reforzó tanto la obstinación de la oposición en sus movilizaciones, como la del régimen baasista, que las resistió empleando una violencia inusitada incluso en la región, vista la suerte final corrida por Gadafi. Desde el final de la primavera de 2011 resultaba evidente que ni el régimen de Asad ni los manifestantes reiteradamente movilizados en las principales ciudades de Siria iban a cejar en sus contrapuestos empeños. En consecuencia, la brutalidad represiva del régimen acabó dando paso a una guerra civil entre el ejército, las fuerzas de seguridad y las milicias *Shabija*, de una parte, y diversos núcleos guerrilleros, singularmente del Ejército de Liberación Sirio (ELP), de otra.

Así, durante el mes de julio de este 2012 se ha ido perfilando de manera cada vez más clara la desagregación del régimen de Asad. Nada lo refleja mejor que el atentado producido en pleno cuartel general de la seguridad del Estado, en el que murieron el general Daud Rajha, cristiano, nombrado ministro de Defensa al comienzo de la revuelta popular como una señal de seguridad dirigida a su comunidad; el viceministro y cuñado del presidente, Asef Shawkat, alauí, uno de los principales responsables de la represión[3]; y otros dos altos mandos, uno de ellos el general designado para dirigir la lucha contra la rebelión en Damasco, fundamental para demostrar al mundo que ni siquiera la capital es inmune ya a la *guerra civil limitada* que sufre el país desde hace meses. Quizá estas muertes no sean el principio del fin, pero desde luego parecen ser el fin del principio. No en vano parecen haberse evaporado de la escena pública la presidenta y algunos familiares muy próximos a El Asad. Además, el atentado ha

demostrado que, o bien la oposición puede golpear en el corazón mismo del régimen, o bien hay sectores de este contrarios a la prolongación del mando de Al Asad, dispuestos a colaborar con ella[4].

Siria vive un *conflicto civil de estructura asimétrica*, situado actualmente en un *impasse* en el que ninguno de los dos bandos dispone por el momento de la clave de la victoria sobre el otro. No se trata de dos ejércitos en lucha, con frentes geográficamente precisos, sino de la unión mancomunada entre una persistente resistencia popular y el ELS enfrentados a diario contra el Ejército, que utiliza modernos sistemas de armas pesadas en la represión, y contra la seguridad y las milicias paramilitares del régimen, que rastrillan ciudades y pueblos a la caza de opositores.

El último episodio de esta guerra ha sido el lanzamiento en la última quincena de julio de dos operaciones: *Volcán Damasco*, que ha supuesto ataques en el sur de la capital, a los que la IV División y otras fuerzas de élite han respondido con dureza pero con visible impotencia, y *Seísmos de Siria*, que ha liberado temporalmente algunos puntos fronterizos del país y trata de coordinar la acción cívico-opositora civil en todo el territorio, a fin de impedir la concentración de las tropas represivas, que han tenido que ser reforzadas por ello con unidades procedentes del Golán.

Desde un punto de vista estrictamente militar, tanto medios gubernamentales franceses como norteamericanos insisten últimamente en el riesgo de que el arsenal de armas de destrucción masiva, de tipo químico, que posee el régimen pueda caer en manos de grupos incontrolados del propio sistema, dispuestos a emplearlas, o de la oposición, y muy especialmente de sectores islamistas vinculados con Al Qaeda, es decir, de sectores que podrían emplearlos dentro o fuera de Siria. Algunos desertores del régimen han estimulado estos temores, que se han dejado sentir fuertemente en Turquía, Jordania y Líbano, y que inevitablemente despiertan la memoria del argumento empleado por el Gobierno de Bush Jr. antes de la invasión de Irak. Pero el peligro mayor del contencioso sirio es que su prolongación dé paso a la implosión de una sociedad de compleja y fraccionada estructura religiosa y étnico-cultural, en una guerra intercomunitaria como las de Líbano, en la que se dirima también —por fuerzas interpuestas— el enfrentamiento entre Irán y algunos países árabes.

Temores que, desde otro ángulo, sacuden especialmente a Israel. En este país, si bien la retirada de unidades sirias del Golán ha tranquilizado más aún una frontera que desde hace muchos años es poco propensa a incendiarse, no es menos cierto que hay el recelo de que su lugar pueda ser ocupado en futuro por fuerzas yihadistas de difícil control y capaces de enlazar con la resistencia nacional libanesa. Supuesto muy inquietante, por cuanto desde la caída de Mubarak se habrían aposentado en la frontera del Sinaí células yihadistas que podrían tratar de entablar contacto con otras hermanas de la Franja de Gaza, recalentando un frente hoy por hoy apagado. Podría perfilarse así un escenario triplemente delicado para Israel, que resultaría simbólicamente cercado y obligado a combatir eventualmente en tres frentes simultáneos.

Atendiendo al aspecto internacional del conflicto sirio, habría que añadir que, debido a las enseñanzas de la guerra en Libia, Asad decidió fortificar sus relaciones con los aliados regionales —Irán y el Hezbolá libanés— y con China y Rusia, recelosas ambas no solo a cualquier forma de movilización popular de sus ciudadanos, sino reticentes también a nuevas intervenciones militares occidentales en la región. Además, Rusia se ha mostrado en todo momento decidida a mantener sus lazos estratégicos con Siria. Las amistosas relaciones son ya históricas. Gobernada desde los setenta por un partido único laico, nacionalista, socializante, hostil a Israel y a los Estados Unidos, la Siria de los Asad estaba llamada a ser la pieza básica en el juego ruso en la región, un anclaje más duradero que el del Egipto nasserista, la Libia de Gadafi o la Argelia de Ben Bella y Boumedienne. Rusia sigue manteniendo allí una base naval en Tartus, donde llegan con regularidad las armas y repuestos que Asad emplea contra su oposición. En razón, además, de las conexiones de Siria con Hezbolá, Hamas e Irán, Rusia refuerza el bloque de los contrarios a USA y a su primer aliado en la zona, Israel. Y, por lo tanto, en ningún momento ha intentado ni moderar ni impulsar la remoción de Asad.

En consecuencia, el gobierno de Damasco, contando con la solidaridad ruso-china, y teniendo bien presentes las dificultades económicas de Europa y de Estados Unidos, así como el carácter electoral que 2012 tiene en este último país, ha podido enfrentar con relativa calma la presión occidental en pro de la moderación de la represión, del establecimiento de corredores humanitarios sin actividad militar en el interior de Siria y en alguna de sus fronteras y, en definitiva, en pro de la negociación entre el régimen y la oposición para alcanzar una solución de compromiso y abrir una transición hacia un régimen de libertades.

Así pues, gracias a Rusia y China, El Asad ha burlado reiteradamente las sucesivas misiones mediadoras de la ONU y de la Liga Árabe, esgrimiendo siempre la justificación de que el régimen legal era acometido por fuerzas terroristas procedentes del exterior y decididas a hacer saltar el delicado equilibrio comunitario mantenido entre la mayoría suní y la minoría gobernante alauí protectora de cristianos, turkmenos, kurdos y drusos. A las buenas palabras de Asad a los mediadores internacionales ha seguido siempre un incremento de las masacres de población civil.

Al mismo tiempo, Qatar y Arabia Saudí, principalmente, han tejido una red de contactos con los diversos sectores de oposición político-militar al régimen baasista; lo mismo que Turquía, necesitada de controlar en el futuro las bases en Siria del Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Con el tiempo, ha llegado a establecerse un cierto equilibrio entre los apoyos árabes y turco a la oposición y los estímulos a la resistencia de Asad por parte de Hezbolá e Irán. Desde este punto de vista, el nuevo *statu quo* intercomunitario y político del Irak postbélico estaría condicionando intensamente también la evolución del conflicto sirio.

Pero finalmente los combates han llegado de Homs, Deraa o Treimsen a la mismísima Damasco y la continuidad de la represión ha dado lugar a una creciente deserción de soldados y oficiales afectos hasta ahora al régimen. Entre los más de 20 generales exiliados se encuentra Manaf Tlass, de la influyente familia homónima, sin la que no hubiera sido tan fácil el acceso al poder de Hafed el Asad, en 1970, ni la sucesión de su hijo Bachar, en 2000. El caso Tlass y las deserciones de otros altos mandos es muy significativa porque la sociedad siria está articulada en torno a redes de influencia clientelar y el abandono de miembros destacados de la élite evidencia la creciente desagregación del poder los Asad[5].

Deserciones, generalización de la actividad armada de la oposición, persistencia de la represión: he ahí tres elementos de un problema que da la impresión de que no va a encontrar la salida de una fórmula de compromiso. El derrocamiento de Asad parece aproximarse día a día, con el riesgo de poderse inaugurar un ciclo de inquietante incertidumbre, en aplicación de una profecía formulada y posibilitada, al mismo tiempo, por el régimen baasista. Y es que, en los días anteriores al atentado contra el cuartel general de la seguridad, cobró fuerza la elaboración de una nueva resolución sancionadora del Consejo de Seguridad, apoyada por USA, Francia, Reino Unido y Alemania, en la que algunos querían añadir una mención al capítulo VII de la Carta de S. Francisco, el que permite las acciones de fuerza. Así pues, la misión de Kofi Annan no logra ningún resultado práctico digno de mención, aunque solo un acuerdo impuesto por la ONU podría impedir violencias generalizadas entre las comunidades después de la caída de Asad. Existe ese riesgo, pues, como ha declarado León Panetta, la violencia en Siria amenaza con quedar fuera de control.

Pero si nadie cree ya que Asad pueda tener un puesto en el futuro de Siria, nadie imagina tampoco una transición sin contar con él, ni puede saberse tampoco cuánto aguantará sin romperse el círculo de hierro formado por el Ejército, el partido bass, las fuerzas de seguridad, las burguesías de Damasco y Alepo, las minorías étnico-religiosas aliadas a los alauíes y el cacicato político-económico asociado al régimen. De momento, la evolución de Siria es una incógnita. Incluso se especula con que pueda producirse una retirada de los restos del régimen hacia la región costera entre Líbano y Turquía, solar de los alauíes, que constituyen el 12% de la población total del país; allí, entre Latakya y Tartus, bajo la protección de Hezbolá y de Rusia,

intentarían resistir hasta lograr un nuevo reparto de poder, de tipo comunitario, según el esquema libanés.

Pero una cosa es clara: a diferencia de Líbano, las fracturas sociales y religiosas que atraviesan la sociedad siria no están basadas en una ocupación excesivamente diferenciada del espacio por parte de las diversas comunidades religiosas, salvo quizá los kurdos. Hay una apreciable continuidad espacial entre comunidades diferentes, que si ha facilitado la violencia represiva puede también facilitar en un hipotético tiempo post-Asad una represión masiva por parte de la oposición armada actual contra los principales beneficiarios del régimen: alauíes, cristianos, turkmenos, kurdos y burguesía suní afecta al régimen. Ese miedo, y no solo la violencia represiva, alimenta las huidas de población al extranjero —más de 100.000— y los traslados en el interior de la propia Siria —un millón de personas—. No en balde, a las habituales masacres del ejército y de la *shabiha* siguen, aunque algo más esporádicamente y en menor número, numerosos asesinatos a cargo de la *katibas* o brigadas de las milicias opositoras.

Las fuerzas políticas

El resultado político final de las revoluciones y cambios reformistas habidos en los países árabo-mediterráneos ha sido la celebración de elecciones parlamentarias —y en Egipto también presidenciales— en las que la fuerza mayoritaria ha resultado ser el islamismo político en una u otra de sus variadas tendencias. Incluso en Marruecos, donde la reforma constitucional emprendida por iniciativa de Mohammed V tuvo la virtualidad de impedir la expansión de la protesta social, una variante del islamismo político, el Partido de la Justicia y el Desarrollo, ha resultado la fuerza más votada y ha constituido nuevo gobierno.

No vamos a referirnos en estas breves notas al islamismo que usualmente se denomina *radical*, el de tipo *yihadista*, es decir, aquel que centra su discurso en la vuelta radical al pasado fundacional del Islam y que, recalcando de forma victimista la opresión de los musulmanes a manos de los grandes poderes de este mundo, aboga por la eliminación de los residuos colonialistas, por el fin de la explotación foránea de los recursos económico-naturales de los países islámicos y por la derrota de la intervención militar extranjera en ellos; para lo cual preconiza la *yihad*, un esfuerzo supremo destinado al establecimiento de un nuevo califato, garantía de la protección del Islam y de la libertad de los musulmanes[6]. Al hablar de islamismo político, circunscribiremos el contenido de esta noción a las ideologías y partidos que, con independencia de los objetivos proclamados y de los medios puestos en práctica para alcanzarlos, buscan su referencia principal en la religión del Islam. Pese a su enorme variedad, en todos los casos se insiste en el respeto en el espacio público a la tradición, creencias y símbolos islámicos, así como en la necesaria mejora de los estándares de moralidad individual y social, lo que incluye las relaciones familiares y entre los sexos, pero también la justicia social y la eliminación de la corrupción.

Desde el punto de vista de las propuestas políticas concretas que han sido objeto de debate en los países árabes surmediterráneos durante la llamada *primavera de los pueblos*, habría que tener en cuenta la referida a la forma de gobierno y la gobernanza misma —fijación de las condiciones para detentar la titularidad del poder; participación del pueblo en el gobierno; determinación del sistema institucional deseable, poderes del Parlamento, consejos, etc.—, sobre la que han existido modulaciones y énfasis muy diversos. Junto a ello, el islamismo político ha otorgado un papel relevante al tema de la justicia social, al establecimiento de pautas de solidaridad y a la eliminación de la corrupción. Pero lo fundamental ha sido el debate sobre el papel que debe otorgarse a la *Charia*, es decir, al camino o la pauta —diseñados en el Corán y la tradición— a que debe ajustarse el recorrido de la vida colectiva.

Una llamativa coincidencia entre las tendencias islamistas que han triunfado en Túnez y Egipto y alcanzado también resultados electorales muy notables en Libia es la pretensión de llevar a la práctica políticas como las que desde 2000 ha implementado en Turquía el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), nombre que, significativamente, coincide con el del partido más votado en las elecciones parlamentarias marroquíes. Desde luego, la *Charia* sigue siendo también en Turquía la fuente principal de inspiración de la acción gubernamental. Pero su aplicación en cada caso concreto se negocia hasta donde es posible entre las diferentes tendencias o partidos existentes. Desde este punto de vista, el islamismo político turco resulta compatible con formas básicas de la democracia[7]. Y, en efecto, en Turquía existen derechos sociales y políticos garantizados por tribunales independientes; elecciones competitivas; división de poderes, control del Ejecutivo por el Parlamento, etc. Es decir, que la *Charia* queda en la práctica reducida al ámbito privado —familia, relaciones familiares, ordenamiento de la sexualidad, etc.—. Sin embargo, el AKP sigue siendo acusado de perseguir lenta, imperceptible pero continuadamente el objetivo de una islamización integral y no democrática de la sociedad.

Ciertamente cuando algún partido o grupo, tanto en el poder como en la oposición, trata de mostrar el carácter islámico de sus objetivos o de su actuación, o bien cuando un observador trata de testar el grado de islamización de una sociedad, habitualmente toma como referencia la legislación implantada en el campo de la moral sexual, de los usos vestimentarios o del grado de dureza sancionadora aplicada a cierto tipo conductas —blasfemia, adulterio o robo, por ejemplo—. Pero con independencia de seguir con atención la evolución de los

códigos civiles o penales de los nuevos sistemas democráticos en construcción.

En cualquier caso, la mayor parte de los grupos islamistas se unió a las revueltas populares para derribar los regímenes autoritarios laicos surgidos de los movimientos de independencia nacional o de la reconducción izquierdizante de los mismos en la etapa de la Guerra Fría —nasserismo, baasismo sirio— y se han integrado en la amplia y, por ahora, última ola de democratización del mundo. Podríamos decir, pues, que se han integrado en un proceso genéricamente democratizador. Desde este punto de vista, las revoluciones árabes suponen la derrota de la vía yihadista, pero no la del islamismo político, por más que su victoria electoral haya coincido con la partición de Malí y la proclamación en su región norteña del Azawad de una república que parece inspirarse en el emirato islámico afgano que 'gobernó' aquel país de 1996 a 2001.

Ciertamente siguen existiendo grupos que podríamos denominar radicales y organizaciones de cariz fundamentalista que preconizan un retorno a las fuentes prístinas del islam, como es el caso de los sectores salafistas, así como de los que rechazan la vía democrática por considerarla una expresión más del imperialismo occidental. Pero con la excepción de Argelia, y parcialmente de Libia, donde la fuerza más votada en las elecciones parlamentarias ha sido de tipo laico, en Marruecos, Túnez y Egipto el islamismo político, singularmente el más próximo a los Hermanos Musulmanes egipcios y al AKP turco, ocupa el principal puesto en la escena política[8] y por el momento parece interesado en construir nuevos sistemas políticos democráticos y de fuerte impregnación islámica. No podía ser de otra forma, pues durante años los islamistas han realizado una tarea de reislamización social, empleándose directamente, o por medio de organizaciones filiales —o matrices, como la marroquí *Justicia y Caridad*—, en un trabajo asistencial solidario a favor de las masas desfavorecidas, supliendo las carencias de Estados corruptos y poco o nada identificados con el establecimiento de parámetros de justicia social.

El tiempo dirá si se mantendrá o no la retórica democrática empleada por el islamismo político en el ciclo revolucionario de 2011 y en el de la edificación de los nuevos sistemas políticos. Y el futuro será también el encargado de dictaminar si se mantendrá el equilibrio entre el islamismo político moderado y el resto de las demás fuerzas políticas, o si será seguido por una presión para imponer sin contestación posible la propia visión social, política institucional o de la vida privada.

Coda europea

Para concluir estas notas, permítasenos hacer una breve referencia a la posición adoptada por la Unión Europea ante la revolución del Mediterráneo árabe.

En primer lugar, es preciso reconocer la imprevisión de que hicieron gala los Gobiernos europeos y el aparato diplomático que dirige la Sra. Ashton, ante la eclosión de unos acontecimientos, de suyo sorpresivos, así como la tardanza en adoptar una línea de acción susceptible de incidir en los mismos. Hubo ministros franceses que, desnortados ante la evolución de los acontecimientos, prodigaron su comprensión hacia las dictaduras que comenzaban a tambalearse, proyectando con ello una luz negra sobre un pasado de estrecha colaboración. Con todo, tampoco hay que olvidar cómo la corrección por Sarkozy de estos desaciertos llevó a obtener de Naciones Unidas la condena del régimen libio y el aval para intervenir en apoyo de la población, de manera que las débiles milicias antigadafistas pudieron liberar el país.

Pero en realidad, y pese a las apariencias que se manifiestan en el caso del conflicto civil libio, la UE ha carecido de una estrategia global digna de ese nombre e incluso de una cohesión suficiente. Sin duda, la inconsistencia de Katherine Ashton, el desprestigio de líderes como Berlusconi, la pobreza de instrumentos de actuación como los contenidos en la propuesta de la *Alianza de Civilizaciones*, la petulante distancia mantenida por Angela Merkel en todo el proceso y la debilidad económica de los países de la frontera normediterránea —España, Francia, Grecia, Italia— son otros tantos factores que explican esa carencia. Y junto a ello, lo verdaderamente esencial: la absorción de los líderes europeos por la crisis económica, con episodios continuos de amenazas de destrucción del euro y de todo lo construido desde 1957. En esas condiciones, la revolución árabe ha puesto de manifiesto el peligroso proceso de renacionalización de las políticas exteriores de los Estados europeos al que estamos asistiendo y que llevó a Alemania, gigante económico y antiguo cemento de la Unión, a actuar por libre en la intervención de la OTAN en Libia.

Sorprende que, pese a estar agobiados durante años por los problemas del terrorismo de matriz islamista, de la emigración irregular masiva y de la seguridad en el abastecimiento de energía procedente del Mediterráneo sur, los europeos se limitasen durante la revolución árabe a reafirmar la Política Europea de Vecindad, definida en 2004, y retocada ligeramente en 2011 con la incorporación del principio de favorecer en la región las transiciones a la democracia, el desarrollo económico y el despliegue de los elementos que caracterizan la sociedad abierta. En concreto, la acción europea en el espacio mediterráneo-árabe se ha reducido a la aplicación de los diversos programas de colaboración económico-financiera orientados a la consecución de los amplios objetivos mencionados, y sometidos al principio de condicionalidad, es decir, a la concesión de la ayuda solo en caso de existir avances hacia la democracia y la sociedad abierta.

Debido a todo ello, la UE ha perdido mucha de su influencia en la región. La Liga Árabe, Arabia Saudí, los países del Consejo de Cooperación del Golfo y, singularmente,

Qatar, así como Turquía la han reforzado extraordinariamente. Por ello se hace preciso repensar en el largo plazo las relaciones de los países de la UE, considerados como un todo, y el mundo árabo-mediterráneo, entendido también como una unidad, incluyendo en él a Turquía —con la reapertura del dosier de su adhesión— pues es evidente que *Ennahda* en Túnez, los *Hermanos Musulmanes* en Egipto y *Justicia y Desarrollo* en Marruecos se remiten claramente a la experiencia del AKP. Sería también muy útil, en este orden, relanzar fórmulas como la Unión por el Mediterráneo, adormecida por la crisis, pero también por el afán protagónico de Sarkozy, que empleó demasiado tiempo en deshacer el callado esfuerzo diplomático de España en torno al *proceso de Barcelona*. Este esfuerzo se hace imprescindible, porque la complejidad de las nuevas sociedades políticas árabes supone una interlocución más difícil entre las dos orillas del *Mare Nostrum*.

NOTAS

[1] Desde este punto de vista no sería ocioso recordar las *fetuas* condenatorias emitidas por algunos prestigiosos jeques conservadores respecto a los *levantamientos* populares contra los *rais* autoritarios.

[2] Segundo en la carrera presidencial, Shafik había sido jefe de Estado Mayor de las FAS y ex primer ministro con Mubarak. La demora en la publicación de los resultados de las elecciones presidenciales por parte de la Comisión Electoral fue considerada por muchos observadores como un intento militar de proclamarle presidente.

[3] Asef Shawkat fue uno de los afectados por las primeras sanciones decretadas por la ONU contra Siria, pese a haber sido, tras el 11-S, uno de los responsables más destacados de la inteligencia siria a la hora de colaborar con la seguridad de los Estados Unidos y otros países occidentales en la persecución de Al Qaeda y de grupos islamistas sirios. Shawkat fue considerado también responsable de haber participado en la planificación del asesinato del premier libanés, Rafic Hariri, en 2005.

[4] Este atentado sigue a otro cometido en mayo de 2012 contra altos responsables de la seguridad, que fueron envenenados con comida preparada.

[5] Manaf Tlass, suní, dirigía hasta su exilio voluntario una unidad directamente implicada en las tareas de represión masiva. Tanto su padre como su hermano Firas también están en el exilio. Una prueba suplementaria de las relaciones de poder de los Tlass es que una mujer de la familia ha estado vinculada a un acaudalado saudí y al exministro de Exteriores de Miterrand, Roland Dumas.

[6] Es obvio que nos estamos refiriendo únicamente a un ámbito doctrinal suní, el mayoritario en los países mediterráneos árabes. En el caso del chiismo, la revolución iraní de 1979 ha establecido un modelo que influye en movimientos como el Hezbolá libanés y combina la primacía política interior de doctores, ulemas y ayatolás en el interior de la comunidad, con una política exterior de contenido mesiánico, relativamente parecido al *yihadismo* suní.

[7] A fin de hacer posible el ingreso de Turquía en la UE, el AKP ha llevado a cabo una reforma en profundidad de la legislación del país, en un intento —finalmente fallido— de acomodarla al acervo comunitario, conforme a los *criterios de Copenhague*.

[8] Este éxito se debe en parte al prestigio alcanzado como fuerza excluida, en general, del poder autoritario, si bien en Egipto la Hermandad pasó por fases de aproximación y de hostilidad al poder de Sadat y Mubarak.